

Auto No: AI 046
Proceso: Ejecutivo
Demandante: Diego Abel Poloche del Valle
Demandado: Jhon Jaime del Valle Gallego
Radicado: 05001 31 03 020 2022 00346 01
Asunto: Confirma providencia.

**TRIBUNAL SUPERIOR
DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN
-SALA CUARTA DE DECISIÓN CIVIL-**

Medellín, Trece (13) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Concita la atención de la Sala desatar el recurso de apelación formulado por la parte demandante en contra del auto fechado el día primero (1) de noviembre del dos mil veintidós (2022), proferido por el Juzgado Veinte Civil del Circuito de Medellín, dentro del trámite del proceso Ejecutivo incoado por Diego Abel Poloche del Valle en contra del señor Jhon Jaime del Valle Gallego, mediante el cual se denegó el mandamiento de pago pretendido por la demandante.

I. ANTECEDENTES

1. Supuestos fácticos vinculados al presente caso. Como hechos relevantes con miras a desatar la alzada, se tiene que, el señor Diego Abel Poloche del Valle y Jhon Jaime del Valle Gallego celebraron Contrato de Promesa de Compraventa para adquirir los derechos de comunidad que le asiste al señor Valle Gallego sobre el 50% que tiene sobre los inmuebles distinguidos con M.I 001-1381908 y 001-1381907. Que como el demandado no compareció al otorgamiento de la escritura pública, solicitó que se librara mandamiento de pago: (i) por la suma de 55.000.000 correspondientes a la cláusula penal, (ii) que se aplicara el fenómeno de la compensación conforme a lo previsto en el artículo 1714 del Código Civil, (iii) ordenar que el promitente vendedor cumpla con el contrato de promesa de compraventa y, en consecuencia, suscriba la escritura pública de compraventa, así como también haga entrega material de los inmuebles.

2. Del auto impugnado. El Juzgado Veinte Civil del Circuito de Oralidad de Medellín, en providencia del primero (1) de noviembre del 2022, rechazó el mandamiento de pago, bajo el argumento que, en el citado contrato de promesa de compraventa, las partes habían acordado como requisito de procedibilidad el agotamiento de la conciliación y como no se acreditó en la demanda, denegó la orden de apremio.

3. Del recurso de reposición y apelación. En la oportunidad procesal pertinente, el apoderado de la demandante interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación, advirtiendo que el A quo desconoció lo previsto en los artículos 11, 12 y 13 del C.G.P, porque exigió el agotamiento de un requisito de procedibilidad que las partes habían pactado contractualmente, exigencia que conforme a las normas procesales no resulta eficaz, tal y como lo establece el artículo en cita, en cuanto que *“las estipulaciones de las partes que establezcan el agotamiento de los requisitos de procedibilidad para acceder a cualquier operador de justicia no son de obligatoria observancia”*. Y en las decantadas sentencias de la Corte Constitucional que han estudiado el requisito de procedibilidad, así como de la Corte Suprema de Justicia por caracterización del defecto procedimental por exceso ritual manifiesto.

3.1. Resolución del Recurso de Reposición: En providencia del trece (13) de diciembre del 2022 el juez resolvió el mecanismo horizontal, en el que si bien le daba razón al recurrente y en principio estaría llamado a reponer la decisión, sin embargo, adoptó otra decisión para denegar el mandamiento de pago, como la ausencia de exigibilidad de las obligaciones ante la duda de cumplimiento del contrato por la parte ejecutante, especialmente sobre la certeza de la fecha en que se realizaron las transacciones, y la diligencia del ejecutante para agotar el proceso de pago por consignación. En tal sentido, decidió no reponer el auto y en su lugar concedió la apelación.

Esbozados así los motivos de disenso de la parte demandante, los cuales dieron lugar a la decisión apelada, procede la Sala Unitaria Civil de decisión a decidir el recurso impetrado con fundamento en las siguientes,

III. CONSIDERACIONES

1. Sea lo primero indicar, que el legislador, al codificar nuestro Código General del Proceso, tuvo en cuenta una serie de exigencias dirigidas a que no se generase un desgaste innecesario del aparato judicial (derroche de jurisdicción), pretendiendo garantizar el éxito del proceso, para que no se produzcan fallos inicuos, esto es, contrarios a la equidad y la justicia, ni que la presentación de la demanda *per se*, no defina la Litis que involucre la controversia.

Es así como, si la demanda cumple con las exigencias establecidas en el estatuto procesal, habrá de ser admitida (o librarse mandamiento de pago en la forma legal si se trata de proceso ejecutivo), pues, de lo contrario, tendrá que rechazarse, sin embargo, el mismo estatuto procesal contempla la figura de la inadmisión, oportunidad procesal en la que el juez indica al demandante las fallas que presenta la demanda, para que, en el término de cinco (5) días este subsane los defectos de que ella adolezca, defectos que han sido definidos taxativamente por el legislador y que, en todo caso, se encuentran establecidos en el artículo 90 del Código General del Proceso.

2. Caso en concreto. Sea lo primero indicar que en el caso sub examine, la competencia del Tribunal se limitará únicamente a los reparos concretos que esbozó el demandante en el recurso de apelación formulado en contra del auto del 1 de noviembre del 2022, esto es, la exigibilidad del requisito de procedibilidad y, que no frente a los otros puntos que arguyó el juez al momento de resolver el recurso de reposición, porque fueron nuevos argumentos que esgrimió el juez para rechazar la demanda, frente a los cuales el apelante guardó silencio y esa es la razón por la que el Tribunal no puede abordar la apelación por ese camino que no fue motivo de alzada.

Bien tal y como lo advirtió el ejecutante, el juez no puede otorgarle efectos a los requisitos de procedibilidad que las partes contractualmente pactaron para debatir las obligaciones plasmadas en el iter contractual, pues si bien dicha disposición puede entenderse como una exteriorización del principio

de la autonomía de la voluntad privada, lo cierto es que de cara a las normas imperativas que regulan el acceso a la justicia su estipulación deviene inoperante, tal y como lo establece el inciso 2 del artículo 13 del C.G.P *“las estipulaciones de las partes que establezcan el agotamiento de requisitos de procedibilidad para acceder a cualquier operador de justicia no son de obligatoria observancia. El acceso a la justicia sin haberse agotado dichos requisitos convencionales, no constituirá incumplimiento del negocio jurídico en donde ellas se hubiesen establecido, ni impedirá al operador de justicia tramitar la correspondiente demanda”*

2.2. Conforme a lo expuesto, no se halla justificación alguna del por qué el juez A quo restó importancia a la norma bajo estudio y, en su lugar, en vez de proceder con la revocatoria del auto, pudiendo adoptar medidas tendientes a estudiar la admisibilidad del mandamiento de pago en relación con las pretensiones de la demanda, para no desprenderse sin más del conocimiento del proceso, llanamente adicionó otros argumentos generales para denegar el mandamiento de pago, frente a los que, sin embargo, la parte recurrente nada advirtió, pese a tener la oportunidad procesal prevista en el numeral 3 del artículo 320 del C.G.P *“resuelta la reposición y concedida la apelación, el apelante, si lo considera necesario, podrá agregar nuevos argumentos a su impugnación”*, o en su defecto haber agotado el recurso, conforme a lo previsto en el artículo 318 del C.G.P *“El auto que decide la reposición no es susceptible de ningún recurso, salvo que contenga puntos no decididos en el anterior, caso en el cual podrá interponerse los recursos pertinentes respecto de los puntos nuevos”*.

2.3. En razón de lo expuesto y teniendo en cuenta que la Competencia del Superior según lo previsto en el artículo 328 del C.G.P no puede extenderse a los asuntos que no fueron objeto de recurso, ni se trata de disposiciones en las que pueda adoptarse una decisión de oficio; no queda otro camino diferente que confirmar la decisión *–pese a que no se comparta las razones adicionales que arguyó el juez para denegar el mandamiento de pago–*, porque devendría inocuo ordenar su revocatoria *–por la ineficacia del requisito de procedibilidad convencional–* cuando el recurrente implícitamente aceptó los argumentos adicionales que expuso el A quo para abstenerse de librar la orden

de apremio –inexigibilidad de las obligaciones contractuales-, pues ningún reparo esbozó al respecto.

Así las cosas, como fueron dos argumentos que justificaron la desavenencia de la orden de apremio, los que según su naturaleza no se pueden estudiar en conjunto, pues la prosperidad de uno no reviste la fuerza necesaria para dejar sin efectos el estudio de admisibilidad que realizó el Juez en el recurso de reposición, es por lo que se confirmará la decisión, ya que el juez tácitamente decidió abandonar el argumento inicial que tuvo para inadmitir la demanda frente al requisito de procedibilidad, abordando otros puntos en que finalmente sustentó que no existía un documento que contuviera una obligación clara, expresa y exigible, argumentos frente a los cuales la parte demandante guardó silencio y es por esa razón que el auto deberá ser confirmado.

En ese orden de ideas, y sin más consideraciones, el ***Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Unitaria de Decisión Civil,***

IV. RESUELVE:

PRIMERO: Confirmar el auto con fecha del día primero (1) de noviembre del dos mil veintidós (2022), por medio del cual se denegó el mandamiento de pago dentro del trámite del proceso Ejecutivo incoado por Diego Abel Poloche del Valle en contra del señor Jhon Jaime del Valle Gallego, conforme a las razones expuestas preliminarmente.

SEGUNDO: Devolver el expediente al Juzgado de origen para que continúe con el trámite del asunto.

NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE,

**JULIÁN VALENCIA CASTAÑO
MAGISTRADO**

Firmado Por:

Julian Valencia Castaño

Magistrado Tribunal O Consejo Seccional

Sala 010 Civil

Tribunal Superior De Medellín - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **ff2f16418e5eafacf3c39de3d19b21a0f3d36d0d4a0380d1ed4049564f8fd0e9**

Documento generado en 13/06/2023 07:52:01 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>